

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA TUNECINA PARA LA
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES

El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Túnez, denominados en adelante las "Partes Contratantes";

Con el deseo de intensificar la cooperación económica entre ambos países y de crear condiciones favorables para las inversiones tunecinas en la Argentina y argentinas en Túnez;

Convencidos de que la promoción y la protección de estas inversiones estimularán las transferencias de capital y de tecnología entre los dos países en el interés de su desarrollo económico.

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO 1

A los fines del presente Acuerdo:

1.- El termino "inversión" designa, los activos, tales como los bienes, derechos e intereses de toda naturaleza, e incluye en particular, pero no exclusivamente:

a) los bienes muebles e inmuebles así como todos los otros derechos reales, tales como hipotecas, privilegios, usufructos, prendas y derechos análogos.

b) las acciones, primas de emisión, y otras formas de participación, aún minoritarias o indirectas, en sociedades constituidas en el territorio de una de las Partes Contratantes;

c) las obligaciones, acreencias y derechos a todas las prestaciones que tengan un valor económico;

d) los derechos de autor, derechos de propiedad industrial (tales como patentes, licencias, marcas registradas, modelos y diseños industriales), procedimientos técnicos, nombres registrados y valor llave;

a) las concesiones conferidas por ley o por contrato, en particular las concesiones relativas a la prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales, incluyendo los que se sitúan en la zona marítima de las Partes Contratantes.

En el entendimiento de que dichos activos deben ser o haber sido invertidos de conformidad con la legislación que rige la inversión extranjera en la Parte Contratante en cuyo territorio o zona marítima se realiza la inversión, antes o después de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

Toda modificación en la forma de la inversión de activos no afectará su calificación de inversiones a condición de que dicha modificación no sea contraria a la legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio o zona marítima se realizó la inversión.

2.- el término "inversor" designa:

a) las personas físicas que tenga la nacionalidad de una de las Partes Contratantes, de conformidad con su legislación y que realicen una inversión en el territorio de la otra Parte Contratante:

b) las personas jurídicas constituídas de conformidad con la legislación de una de las Partes Contratantes y que tengan su sede social en el territorio de dicha Parte Contratante, y que efectúen una inversión en el territorio de la otra Parte Contratante:

c) las disposiciones de los artículos 6 y 8 del presente Acuerdo no se aplicarán a las inversiones de las personas físicas que sean nacionales de una Parte Contratante y que, a la fecha de la inversión en el territorio de la otra Parte Contratante, hayan tenido su domicilio en el territorio de esa Parte Contratante por un período superior a los dos años, a menos que la inversión provenga del exterior. La reinversión de las ganancias de la inversión así admitida se beneficiará de las disposiciones del presente Acuerdo.

3.- El término "ganancias" designa las sumas producidas por una inversión, tales como los beneficios, los dividendos o intereses durante un período determinado.

Las ganancias de la inversión y, en el caso de reinversión de conformidad con la legislación en vigor, las ganancias de su reinversión gozarán de la misma protección que la inversión.

4.- El presente Acuerdo se aplica al territorio de cada una de las Partes Contratantes, así como a la zona marítima de cada una de las Partes Contratantes, definida aquí como la zona económica y la plataforma continental, que se extiende más allá del límite de las aguas territoriales de cada una de las Partes Contratantes y sobre las cuales ellas poseen, de conformidad con el derecho internacional, derechos soberanos o jurisdicción a los fines de la prospección, explotación y preservación de los recursos naturales.

ARTICULO 2

1.-Cada Parte Contratante admitirá y promoverá, en el marco de su legislación y de las disposiciones del presente Acuerdo, las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante, en su territorio y su zona marítima.

2.- Las Partes Contratantes examinarán con benevolencia, en el marco de su legislación interna, las solicitudes de entrada y autorización de estadía, de trabajo y de circulación presentadas por nacionales de una Parte Contratante, en virtud de una inversión realizada en el territorio de la otra Parte Contratante.

ARTICULO 3

Cada Parte Contratante asegurará en su territorio y en su zona marítima, un tratamiento justo y equitativo, conforme a los principios del derecho internacional a las inversiones efectuadas por inversores de la otra Parte Contratante.

ARTICULO 4

1.- En las condiciones establecidas en las disposiciones de los párrafos 2, 3 y 4 del presente Artículo, cada Parte Contratante acordará en su territorio y zona marítima a los inversores de la otra Parte Contratante, respecto de sus inversiones y actividades vinculadas a éstas, así como a los inversores autorizados, de conformidad con la legislación vigente, a trabajar en su territorio o en su zona marítima en virtud de una inversión, un tratamiento no menos favorable que el acordado a sus nacionales o que el acordado a los inversores de la nación más favorecida, si éste fuese más ventajoso.

2.- Este tratamiento no se extenderá a los privilegios que una Parte Contratante acuerde a los inversores de un tercer Estado, en virtud de su participación o de su asociación a una zona de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común o toda otra forma de organización económica regional.

3.- Asimismo, este tratamiento no se extenderá a los privilegios que una Parte Contratante acuerde a los inversores de un tercer Estado, en virtud de un convenio tendiente a evitar la doble imposición fiscal o de todo otro convenio en materia fiscal.

4.- El tratamiento de la nación más favorecida no se extenderá a los privilegios particulares que cada una de las Partes Contratantes acuerde a los inversores extranjeros por una inversión realizada en el marco de una financiación concesional.

ARTICULO 5

1.- Las inversiones efectuadas por inversores de una de las Partes Contratantes gozarán en el territorio o zona marítima de la otra Parte Contratante de protección y seguridad plenas y enteras.

2.- Las Partes Contratantes no tomarán directa ni indirectamente, medidas de expropiación o de nacionalización ni ninguna otra medida equivalente que tenga un efecto similar de desposesión, salvo por causa de utilidad pública y con la condición de que dichas medidas no sean discriminatorias.

Las medidas a que se hace referencia precedentemente que fueren adoptadas darán lugar al pago de una indemnización pronta y adecuada cuyo monto será calculado sobre el valor real que tenían las inversiones concernidas inmediatamente antes al día en que dichas medidas fueron adoptadas o tomaron estado público.

Esta indemnización, su monto y las modalidades de pago serán fijadas a más tardar a la fecha de la desposesión. Esta indemnización será efectivamente realizable, pagada sin demora y libremente transferible.

3.- Los inversores de una Parte Contratante cuyas inversiones hayan sufrido pérdidas debido a guerras, o a todo otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia

nacional o revuelta sobrevenida en el territorio o zona marítima de la otra Parte Contratante, recibirán de esta última un tratamiento no menos favorable que el acordado por ésta a sus propios inversores o a los de la nación más favorecida.

ARTICULO 6 -

1.- Cada Parte Contratante en cuyo territorio o zona marítima hayan sido realizadas inversiones por inversores de la otra Parte Contratante, acordará a dichos inversores la libre transferencia de sus activos y en particular:

- a) los beneficios, dividendos y otras ganancias corrientes;
- b) las sumas necesarias para el reembolso de los préstamos regularmente contraídos directamente vinculados a la realización o al desarrollo de la inversión y de los intereses correspondientes;
- c) el producido de la cesión o de la liquidación total o parcial de la inversión, incluyendo los incrementos de capital invertido;
- d) las indemnizaciones pagadas en aplicación del Artículo 5.-
- e) las ganancias derivadas de los derechos incorporales indicados en el párrafo 1. incisos d) y e) del Artículo 1.

Los nacionales de cada una de las Partes Contratantes, que hayan sido autorizados a trabajar en el territorio o zona marítima de la otra Parte Contratante en virtud de una inversión admitida, estarán igualmente autorizados a transferir a su país de origen una parte apropiada de su remuneración.

2.- Las transferencias previstas en los párrafos precedentes serán efectuadas sin demora, a la tasa de cambio normal aplicable a la fecha de la transferencia, de conformidad con los procedimientos previstos por la legislación del país concernido, los que no podrán denegar, suspender o desnaturalizar la libre transferencia.

ARTICULO 7

1.- En la medida que la reglamentación de una de las Partes Contratantes prevea una garantía para las inversiones efectuadas en el exterior, ésta podrá ser acordada, en el marco de un examen caso por caso, a las inversiones efectuadas por inversores de esta Parte Contratante en el territorio o zona marítima de la otra Parte Contratante.

Las inversiones efectuadas por inversores de una Parte Contratante en el territorio o zona marítima de la otra Parte Contratante no podrán contar con la garantía precitada si no han obtenido previamente la aceptación de esta última Parte Contratante.

ARTICULO 8

1.- Toda controversia relativa a las inversiones, en los términos del presente Acuerdo, entre una Parte Contratante y un inversor de la otra Parte Contratante, será en la medida de lo posible, solucionada amistosamente entre las dos partes en la controversia.

2.- Si la controversia no hubiera podido ser solucionada en el término de seis meses a partir del momento en que hubiera sido planteada por una u otra de las partes concernidas, será sometida, a pedido del inversor:

- o bien a las jurisdicciones nacionales de la Parte Contratante involucrada en la controversia

- o bien al arbitraje internacional en las condiciones abajo descritas en el párrafo 3.

Una vez que un inversor haya sometido la controversia a las jurisdicciones de la Parte Contratante involucrada, o al arbitraje internacional, la elección de uno u otro de esos procedimientos será definitiva.

3.- En caso de recurso al arbitraje internacional, la controversia podrá ser llevada ante uno de los órganos de arbitraje designados a continuación, a elección del inversor:

- al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.), creado por el "Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados", abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado Parte

en el presente Acuerdo haya adherido a aquél. Mientras esta condición no se cumpla, cada Parte Contratante da su consentimiento para que la controversia sea sometida al arbitraje conforme con el reglamento del Mecanismo complementario del C.I.A.D.I.;

- a un tribunal de arbitraje "ad-hoc" establecido de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (C.N.U.D.M.I.)

4.- El órgano arbitral decidirá en base a las disposiciones del presente Acuerdo, al derecho de la Parte Contratante que sea parte en la controversia, incluidas las normas relativas a conflictos de leyes, a los términos de eventuales acuerdos particulares concluidos con relación a la inversión como así también a los principios del derecho internacional en la materia.

5.- Las sentencias arbitrales serán definitivas y obligatorias para las partes en la controversia.

ARTICULO 9

Si una de las Partes Contratantes, en virtud de una garantía acordada por una inversión realizada en el territorio o zona marítima de la otra Parte Contratante efectúa pagos a uno de sus inversores, aquella se subrogará, en virtud de este hecho, en los derechos y acciones de este inversor, en particular en aquellos definidos en el artículo 8 del presente Acuerdo.

ARTICULO 10

Las inversiones que hayan sido objeto de un compromiso particular de una de las Partes Contratantes con relación a inversores de la otra Parte Contratante, estarán regidas, sin perjuicio de las disposiciones del presente Acuerdo, por los términos de dicho compromiso en la medida que éste contenga disposiciones más favorables que las previstas en el presente Acuerdo.

ARTICULO 11

1.-Las controversias relativas a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo serán resueltas, en lo posible, por medio de la vía diplomática.

2.- Si la controversia no ha podido ser resuelta en un plazo de seis meses, contados a partir del momento en que haya sido planteada por alguna de las Partes Contratantes, ésta será sometida, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, a un Tribunal arbitral.

3.- El Tribunal arbitral se constituirá para cada caso de la siguiente forma:

Cada Parte Contratante designará un miembro y los dos miembros designarán de común acuerdo un nacional de un tercer Estado que será nombrado Presidente por las dos Partes Contratantes. Todos los miembros deberán ser nombrados en un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que una de las Partes Contratantes haya comunicado a la otra Parte Contratante su intención de recurrir al arbitraje.

4.- Si los plazos previstos en el párrafo 3 de este Artículo no fueran observados, y a falta de otro arreglo, cualquiera de las Partes Contratantes invitará al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas a proceder a los nombramientos necesarios. Si el Secretario General fuera nacional de una de las Partes Contratantes, o se encontrara impedido de hacerlo por alguna otra causa, el Secretario General adjunto más antiguo, que no posea la nacionalidad de ninguna de las Partes Contratantes, procederá a efectuar las designaciones necesarias.

5.- El Tribunal arbitral tomará su decisión por mayoría de votos. Esta decisión será definitiva y obligatoria de pleno derecho para las Partes Contratantes.

El Tribunal fijará su propio reglamento. Interpretará la sentencia a petición de cualquiera de las Partes Contratantes.

A menos que el Tribunal disponga lo contrario, teniendo en cuenta circunstancias particulares, los gastos del procedimiento arbitral incluyendo los de los árbitros, serán sufragados por partes iguales por las Partes Contratantes.

ARTICULO 12

El presente Acuerdo no será aplicable a las divergencias o controversias cuyo origen sea anterior a la fecha de firma del presente Acuerdo, ni tampoco a las inversiones realizadas antes de 1956.

ARTICULO 13

Cada una de las Partes Contratantes notificará a la otra el cumplimiento de los procedimientos internos requeridos para la entrada en vigor del presente Acuerdo, la que se hará efectiva un mes después del día de la recepción de la última notificación.

El Acuerdo se celebra por un plazo inicial de diez años: permanecerá en vigencia después de éste a menos que una de las Partes Contratantes lo denuncie por la vía diplomática con un año de preaviso.

Después de la expiración del período de validez del presente Acuerdo, sus disposiciones continuarán aplicándose a las inversiones efectuadas cuando aquel se encontraba vigente, durante un período suplementario de quince años.

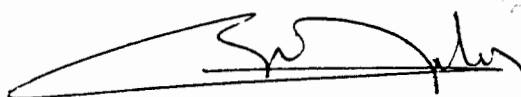
En fe de lo cual los infrascriptos, debidamente autorizados a tal efecto por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo.

Hecho el 17 de junio de 1992, en Buenos Aires, en duplicado en los idiomas español, árabe y francés, siendo los tres textos igualmente auténticos.

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping stroke followed by a smaller, more defined stroke.

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA TUNECINA

A handwritten signature in black ink, featuring a long, horizontal, slightly wavy line with a small, curved flourish at the end.

ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES
DES INVESTISSEMENTS

-000-

Le Gouvernement de la République Argentine et le Gouvernement de la République Tunisienne ci-après dénommées "les Parties Contractantes";

Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements argentins en Tunisie et tunisiens en Argentine ;

Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique.

Sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1

Pour l'application du présent Accord :

1.- Le terme " investissement " désigne les avoirs tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures et , plus particulièrement mais non exclusivement :

a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues ;

b) les actions , primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties Contractantes;

c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;

d) les droits d'auteur , les droits de propriété industrielle (tels que brevets d'inventions, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles) , les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle ;

e) les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties Contractantes .

Etant entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation régissant l'investissement étranger de la Partie Contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est effectué avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord .

Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie Contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé .

2- Le terme " investisseur " désigne :

a) Les personnes physiques qui, d'après la législation de l'une des Parties Contractantes, sont considérées comme des nationaux et qui effectuent un investissement sur le territoire de l'autre Partie Contractante ;

b) Les personnes morales constituées sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, conformément à la législation de celle -ci et y possédant leur siège social et qui effectuent un investissements sur le territoire de l'autre Partie Contractante ;

c) Les dispositions des articles 6 et 8 ci-dessous ne s'appliquent pas aux investissements des personnes physiques qui sont des nationaux d'une Partie Contractante , et qui , à la date de l'investissement sur le territoire de l'autre Partie Contractante , sont domiciliées depuis plus de deux ans sur le territoire de cette autre Partie Contractante sauf si l'investissement provient de l'étranger . Le réinvestissement des revenus de l'investissement ainsi admis bénéficie des dispositions du présent Accord .

3- Le terme " revenus " désigne toutes les sommes produites par un investissement , tels que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une période donnée .

Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement conformément à la législation en vigueur, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.

4.- Le présent Accord s'applique au territoire de chacune des Parties Contractantes ainsi qu'à la zone maritime de chacune des Parties Contractantes, ci-après définie comme la zone économique et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties Contractantes et sur lesquels elles ont, en conformité avec le Droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation des ressources naturelles.

ARTICLE 2

Chacune des Parties Contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et dans sa zone maritime.

Les Parties Contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie Contractante, au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

ARTICLE 3

Chacune des Parties Contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du Droit international, aux investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie Contractante.

ARTICLE 4

Sous réserve des dispositions des paragraphes 2,3 et 4 du présent article chaque Partie Contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime aux investisseurs de l'autre Partie Contractante en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements ainsi

qu'aux investisseurs autorisés, conformément à la législation en vigueur à travailler sur son territoire ou dans ses zones maritimes, au titre d'un investissement, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses ressortissants, ou le traitement accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux.

Ce traitement ne s'étend pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale.

De même, ce traitement ne s'étend pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu d'une convention tendant à éviter la double imposition fiscale ou de toute autre convention en matière fiscale.

Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'étend pas aux privilèges particuliers que chacune des deux Parties Contractantes accordent aux investisseurs étrangers pour un investissement réalisé dans le cadre d'un financement concessionnel.

ARTICLE 5

1.- Les investissements effectués par des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties Contractantes bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie Contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.

2.- Les Parties Contractantes ne prennent pas, directement ou indirectement, de mesures d'expropriation ou de nationalisation, ni toute autre mesure équivalente ayant un effet similaire de dépossession, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires.

Les mesures visées ci-dessus qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant, calculé sur la valeur réelle des investissements concernés, la veille du jour où ces mesures sont prises ou connues du public.

Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable.

3.- Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.

ARTICLE 6

1.- Chaque Partie Contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert de leurs avoirs et notamment :

- a) des bénéfices, dividendes, et autres revenus courants;
- b) des sommes nécessaires au remboursement des emprunts régulièrement contractés directement liés à la réalisation ou au développement de l'investissement et des intérêts y afférents ;
- c) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;
- d) des indemnités payées en application de l'Article 5 ci-dessus ;
- e) des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d) et e) de l'Article 1.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie Contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leurs pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.

2.- Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal applicable à la date du transfert, selon les procédures prévues par la

législation du pays concerné ; étant entendu que celles-ci ne sauraient dénier, suspendre ou dénaturer le libre transfert.

ARTICLE 7

Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties Contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des investisseurs de cette Partie Contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie Contractante.

Les investissements effectués par des investisseurs de l'une des Parties Contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie Contractante ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie Contractante.

ARTICLE 8

1.- Tout différend relatif aux investissements au sens du présent Accord, entre l'une des Parties Contractantes et un investisseur de l'autre Partie Contractante est, autant que possible, réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.

2.- Si le différend n'a pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties concernées, il est soumis, à la demande de l'investisseur :

- soit aux juridictions nationales de la Partie Contractante impliquée dans le différend ;
- soit à l'arbitrage international, dans les conditions décrites au paragraphe 3 ci-dessous.

Une fois qu'un investisseur a soumis le différend soit aux juridictions de la Partie Contractante concernée, soit à l'arbitrage international, le choix de l'une ou de l'autre de ces procédures reste définitif.

3.- En cas de recours à l'arbitrage international, le différend peut être porté devant l'un des organes d'arbitrage désignés ci-après, au choix de l'investisseur :

- au Centre International pour le Règlement des

Différends Relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I), créé par la "Convention pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d'autres Etats" ouverte à la signature à Washington le 18 Mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord aura adhéré à celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, chacune des Parties Contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du mécanisme complémentaire du C.I.R.D.I ;

- à un tribunal d'arbitrage ad-hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I).

4.- L'organe d'arbitrage statuera sur la base des dispositions du présent Accord, du droit de la Partie Contractante partie au différend y compris les règles relatives aux conflits de lois, des termes des accords particuliers éventuels qui auraient été conclus au sujet de l'investissement ainsi que des principes de Droit International en la matière.

5.- Les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires à l'égard des parties au différend.

ARTICLE 9

Si l'une des Parties Contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie Contractante effectue des versements à l'un de ses investisseurs elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de cet investisseur en particulier ceux définis à l'article 8 du présent Accord.

ARTICLE 10

Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties Contractantes à l'égard des investisseurs de l'autre Partie Contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.

ARTICLE 11

1.- Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.

2.- Si dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties Contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie Contractante, à un Tribunal arbitral.

3.- Le dit Tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante :

Chaque Partie Contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé Président par les deux Parties Contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties Contractantes a fait part à l'autre Partie Contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.

4.- Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés l'une ou l'autre Partie Contractante, en l'absence de tout accord applicable, invite le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire Général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie Contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire Général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties Contractantes procède aux désignations nécessaires.

5.- Le Tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties Contractantes.

Le Tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie Contractante.

A moins que le Tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties Contractantes.

ARTICLE 12

Le présent Accord ne sera pas applicable aux divergences ou différends dont la naissance est antérieure à la date de signature du présent Accord ainsi qu'aux investissements réalisés avant 1956.

ARTICLE 13

Chacune des Parties Contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.

L'Accord est conclu pour une durée initiale de dix ans ; il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties Contractantes ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an.

A l'expiration de la période de validité du présent Accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze ans.

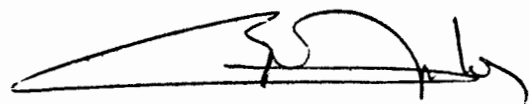
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Accord.

Fait en triple exemplaires originaux, à
le *17 June* 1992, en langues espagnole, arabe et française, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la
République Argentine

A stylized signature consisting of a large, sweeping 'L' shape followed by a horizontal line.

Pour le Gouvernement de la
République Tunisienne

A signature that starts with a large, curved 'S' shape and ends with a horizontal line.